

**EL MUNDO**  
GRUPO UNIDAD EDITORIAL

**DIRECTOR:**  
FRANCISCO ROSELL.

**DIRECTORES ADJUNTOS:**  
Joaquín Manso (Información)  
y Martí Saballs.

**DIRECTOR DE ARTE:**  
Rodrigo Sánchez.



**PRESIDENTE:**  
ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO.

**VICEPRESIDENTE:**  
Giampaolo Zambelletti.

**DIRECTOR GENERAL:**  
Nicola Speroni.

**DIRECTOR GENERAL DE PUBLICACIONES:**  
Aurelio Fernández.

**DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:**  
Jesús Zaballa.

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas,  
Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González.  
**EDITA:** Unidad Editorial Información  
General, S.L.U.

## Sánchez renuncia a gobernar y a tomar decisiones

PEDRO SÁNCHEZ exhibió ayer en el Congreso una caricatura de sí mismo. Ajeno a la profunda crisis sanitaria y económica que vive el país e indiferente a la situación agónica de miles de españoles, el presidente del Gobierno aprovechó sus intervenciones desde la tribuna para hacer campaña electoral y dibujar un panorama idílico de la estrategia de vacunación y de una supuesta recuperación que llegará en 2022. Justo cuando los efectos secundarios de las vacunas de Janssen y AstraZeneca amenazan con retrasar el proceso de inmunización masiva, Sánchez insistió en algo que ya nadie se toma en serio: la vacunación de 33 millones de personas (un 70% de la población) a finales del verano. Y anunció que España dispondrá de 182 millones de dosis para este año y el próximo, una nueva promesa en el vacío, ya que es algo que no depende de él sino de la UE.

Este triunfalismo injustificado le llevó a descartar una nueva prórroga del estado de alarma –pese a la inminencia de una posible cuarta ola– y a plantear como única alternativa a partir del 10 de mayo «seguir resistiendo» y hacer frente al Covid «con unidad y responsabilidad individual». Es decir, el Gobierno renuncia a gestionar la crisis –reconociendo indirectamente su fracaso– y hace recaer sobre las Comunidades Autónomas el peso de las decisiones para combatir la pandemia, pero sin dotarlas de instrumentos legales para que puedan adoptar

medidas restrictivas, tal y como le aconsejó el Consejo de Estado, que en un reciente dictamen recomendaba la reforma de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública para que las CCAA puedan «afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud» sin el paraguas que proporciona el estado de alarma. Ahora, sin embargo, las CCAA solo podrán tomar decisiones con el aval de los tribunales, una fórmula que ya se demostró ineficaz y contradictoria tras el final del primer estado de alarma, ya que lo que se consideraba legal en una comunidad, era ilegal en otra. La gestión de la pandemia requiere de una coordinación entre los gobiernos autonómicos, porque como ha repetido alguna vez el propio presidente, el virus no sabe de fronteras.

Pero las críticas más duras de la oposición llegaron tras la presentación (por novena vez) del plan de recuperación y resiliencia, un documento que el Gobierno deberá enviar a Bruselas y que solo, tras su aprobación, provocará el desbloqueo de los 140.000 millones de fondos europeos. Se trata de un texto enrevesado y falto de concreción que deja, además, pendiente de desarrollo reformas tan decisivas como la fiscal, la laboral o la de las pensiones, que quedan postpuestas para «cuando las condiciones económicas lo permitan», una de las coletillas más usadas por el Gobierno y que demuestra, por un lado, que sigue sin hacer los deberes que le impuso la UE. Pero también que Sánchez parece estar más pendiente de las elecciones madrileñas que de las reformas, y quiere minimizar los efectos negativos que tendrían el anuncio de recortes, la subida de impuestos o el mantenimiento de la reforma laboral del PP.

### El Gobierno sigue sin concretar en qué consiste su plan de resiliencia

## TV3 y el linchamiento a los disidentes

LA CAMPAÑA de intimidación que está sufriendo Javier Cercas durante los últimos días, con acoso de dirigentes y militantes independentistas a partir de la difusión de un bulo por las redes sociales, vuelve a poner de manifiesto la metástasis de intolerancia larvada durante décadas de hegemonía política, social y cultural por parte del nacionalismo excluyente. El escritor tuvo el coraje de defender la actuación del Rey y la legalidad constitucional en una entrevista en TV3 y, a partir de ahí, el independentismo desató su ira contra él tergiversando unas palabras suyas del pasado en las que, supuestamente, defendía una intervención militar en Cataluña. «No me voy a callar ni me voy a marchar», advierte el novelista a EL MUNDO.

La intelectualidad catalana, salvo excepciones como el grupo que fundó Ciudadanos, mantuvo históricamente una postura de ambigüedad respecto a la deriva separatista. Desde el golpe del 1-O en 2017, muchos creadores decidieron levantar la voz. A Cercas le honra su posición coherente y valiente. Todo lo contrario que las elites y la turba independentista, empeñadas en alimentar un peligroso clima de odio al que contribuye la televisión autonómica, cuyo control está siendo objeto de pugna entre ERC y Junts. Señalar y linchar al disidente constituye un hecho abominable y revela la gravedad de la amenaza que representa el desafío separatista.

GALLEGO & REY



## El agujero negro de la Seguridad Social

DÍA SÍ, día también, asistimos a anuncios propagandísticos del Gobierno que más parecen los cuentos de la lechera, a promesas económicas que no se sostienen por la total ausencia de rigor, al lanzamiento de mensajes sobre brotes verdes que no llegan... Y, mientras, España sigue sin afrontar retos tan preocupantes y de tanta importancia como las reformas necesarias por ejemplo para garantizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social. Este pilar básico de nuestro Estado del bienestar acumula déficits desde 2012. Y la situación es tan inquietante que, en realidad, cabe hablar de que se encuen-

tra en quiebra técnica: su déficit rozó en 2020 los 30.000 millones de euros y si la cuantía no fue incluso superior es porque el Estado le inyectó 20.000 millones adicionales. Además, según los últimos datos oficiales, solo el fuerte impulso de las administraciones públicas a la contratación de personal en el último año ha permitido a la Seguridad Social compensar buena parte de la sangría de afiliados que ha sufrido por parte del sector privado desde la expansión de la pandemia del coronavirus.

La gran reducción del número de afiliados y el incremento del paro en nuestro país hacen que por cada tres trabajadores que cotizan a la Seguridad Social haya hoy dos perceptores de prestaciones por desempleo o jubilación, algo que resulta del todo inviable. Estamos ante un verdadero asunto de Estado que exige la voluntad decidida de nuestros dirigentes para dar los pasos necesarios, algo que difícilmente se va a producir con la coalición del

PSOE y Podemos en Moncloa. No hay política económica más necesaria ni más eficaz que la generación de empleo. Y, mientras el Gobierno sigue enzarzado en cómo derogar la última reforma laboral que tan imprescindible y eficaz se demostró, sus anteojeras sectarias no le permiten dar pasos para favorecer las condiciones que redunden en la creación de puestos de trabajo. La contratación en el sector público no maquilla la dramática realidad; de hecho, la agrava por el estado de nuestras arcas.

Medidas sensatas como elevar las cotizaciones para la pensión y reducir las de desempleo o fomentar los planes y fondos de pensiones llevan muchos años sobre las mesas de los expertos, durmiendo el sueño de los justos. Y salvar la Seguridad Social es condición indispensable para preservar el sistema público de pensiones. No se puede seguir indefinidamente ni escondiendo la cabeza como el avestruz ni haciendo demagogia política con un asunto tan fundamental.